

## RESOLUCION N. 00445

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 01 de 1984, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas en la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### C O N S I D E R A N D O

##### I. ANTECEDENTES

Que, mediante oficio de **Radicado No. 2007ER36993 del 06 de septiembre de 2007**, la Alcaldía Mayor de Bogotá, remite queja en donde se denuncia la presunta contaminación generada por el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá de esta ciudad.

Que, en atención a lo anterior, el día 08 de octubre de 2007, profesionales del grupo de quejas y soluciones ambientales de la Secretaria Distrital de Ambiente, adelantaron visita al establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá, con el fin de verificar los procesos productivos que allí se adelantan, la cual fue atendida por el señor Ricardo Daza quien manifestó se empleado. En constancia de lo anterior se diligencio acta de visita sin numeración.

Que, producto de dicha visita, se emitió el **Concepto Técnico No. 15028** del día 18 de diciembre de 2007 y con posterioridad el **Requerimiento No. 2008EE36263 del 10 de octubre de 2008**, mediante el cual se solicita al señor PEDRO ALFONSO BENAVIDES PINZÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 3.236.064, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá para que:

*“(…) - En el término de treinta (30) días hábiles tome las medidas necesarias para controlar las emisiones generadas por la actividad de tal forma que se garantice la captación, extracción y dispersión adecuada de los gases, vapores, olores y partículas sin generar molestias y transeúntes en cumplimiento del artículo 23 del Decreto 948 de 1995.*

- En un término de ocho (8) días hábiles, realice el trámite de obtención y/o registro del libro de operaciones de flora ante la Secretaria Distrital de Ambiente, para dar cumplimiento al artículo 65 del Decreto 1791 de 1996.

El día 21 de Abril de 2009, profesionales de la Subdirección de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre de la Secretaria Distrital de Ambiente, adelantaron visita al establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá, con el fin de verificar el cumplimiento al Requerimiento No. 2008EE36263 del 10 de Octubre de 2008, la cual fue atendida por el señor Pedro Alfonso Benavides Pinzón en calidad de propietario del establecimiento. En constancia de lo anterior se diligencio Acta de Visita de Verificación No. 189.

Con consecuencia de lo anterior, el 21 de mayo de 2009, se emitió el Concepto Técnico No. 009812, mediante el cual se concluyó que el señor Pedro Alfonso Benavides Pinzón identificado con cedula de ciudadanía No. 3.236.064, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá:

- Debido a que la actividad no genera emisiones significativas de material particulado que puedan generar molestias a vecinos y transeúntes, el requerimiento EE36263 del 10/10/08 en el aparte "tome las medidas necesarias para controlar las emisiones generadas por la actividad de tal forma que se garantice la captación, extracción y dispersión adecuada de los gases, vapores, olores y partículas sin generar molestias y transeúntes" no procede.

- No dio cumplimiento con el requerimiento EE36263 de 2008 en el aparte: "realice el trámite del libro de operaciones (...)"

Que, mediante **Auto No. 3079 del 23 de Abril de 2010**, el Director de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente, encontró merito suficiente para iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor Pedro Alfonso Benavides Pinzón identificado con cedula de ciudadanía No. 3.236.064, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

Que, el precitado Auto se notificó personalmente al presunto infractor el día 30 de agosto de 2010.

Que, El día 11 de junio de 2015, mediante oficio de **radicado No. 2015EE102003**, esta Secretaria le comunico a la Procuraduría General de la Nación el inicio del proceso sancionatorio ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de Ley 1333 de 2009.

El día 16 de marzo de 2011, mediante **Auto No. 1502**, el Director de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente formulo pliego de cargos a título de dolo al señor Pedro Alfonso Benavides Pinzón identificado con cedula de ciudadanía No. 3.236.064, en calidad

de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá por:

*(...) CARGO UNICO: Por no haber tramitado ante la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, el registro del libro de operaciones, trasgrediendo presuntamente con esta conducta el artículo 65 del Decreto 1791 de 1996 (...)*”.

Que, el anterior auto se notificó al presunto infractor por edicto que se fijó el 18 de abril de 2011 y se desfijo 26 de abril de la misma anualidad.

Que, el mediante **Concepto Técnico No. 730 día 10 de octubre de 2013**, profesionales de la Subdirección de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre de la Secretaria Distrital de Ambiente, adelantaron visita al establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá, con el fin de verificar si el mismo sigue en funcionamiento.

Que, al consultar el Registro Único Empresarial y Social de la Cámara y Comercio de Bogotá, a través de la página web, con el número de cedula No. 3.236.064 perteneciente al señor Pedro Alfonso Benavides Pinzón, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativa, el mismo arroja que cuenta con matricula mercantil 1115182, y con ultimo año de renovación en el 2004.

Que, mediante **Auto No. 04817 del 09 de noviembre de 2015**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispuso lo siguiente:

*“(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el proceso sancionatorio de carácter ambiental, iniciado por esta Entidad, a través del Auto No. 3079 del 23 de Abril de 2010, en contra del señor Pedro Alfonso Benavides Pinzón identificado con cedula de ciudadanía No. 3.236.064, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá, por el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente Auto (...)*”.

Que, el precitado Auto fue notificado personalmente el 22 de enero de 2016. Con Constancia Ejecutoria del 25 de enero de 2016.

Que, mediante **Radicado No. 753 del 01 de julio de 2016**, la Dirección de Control Ambiental a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre realizó visita de verificación para actualización del expediente SDA-08-2009-1701.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue conocida por esta entidad el **21 de abril de 2009**, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, resulta procedente establecer como primera medida, que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en los Decretos 1594 de 1984 y Decreto Ley 01 de 1984.

Consecuentemente, se advierte que los hechos materia de investigación son de naturaleza y de ejecución instantánea, dado que su consumación tuvo lugar en un único momento, claramente determinado en el tiempo, el cual marca el punto de referencia y de partida para el computo del término de caducidad.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

**“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS.** *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el sub júdice es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

*"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

***Sin embargo***, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, **los términos que hubieren comenzado a correr**, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes**

**vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones**". (...) (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso esta Secretaría conoció del hecho irregular el **21 de abril de 2009**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *"nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente"*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o

proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

*"Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*"Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...)"*

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

*"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)"*

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que la autoridad ambiental competente para la fecha disponía de un término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es, desde el **21 de abril de 2009**, fecha de la verificación de los hechos, que dieron lugar a la presente actuación, y que se relacionan con el presunto incumplimiento de la normatividad ambiental.

Por tanto, la autoridad ambiental disponía hasta el día **21 de abril de 2012** para la expedición del acto administrativo que resolvería de fondo la actuación administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió, por lo anterior, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

Es por lo anterior que se procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y en consecuencia, se ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1701**.

### III. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

En relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se

le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

En virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

Que en virtud del artículo 2 numeral 6° de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021, la Secretaría Distrital de Ambiente delegó en cabeza del Director de Control Ambiental de la Entidad, *“Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios.”*

Que, en mérito de lo expuesto, el director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria, de los hechos conocidos el día **21 de abril de 2009**, los cuales sirvieron de fundamento para proferir el **Auto No. 3079 del 23 de abril de 2010**, mediante el cual se encontró merito suficiente para iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor **PEDRO ALFONSO BENAVIDES PINZÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. **3.236.064**, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Notificar el contenido de la presente resolución al señor **PEDRO ALFONSO BENAVIDES PINZÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 3.236.064, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la **Calle 70 B No. 111 D-59 del Barrio la Riviera de la Localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá**, de acuerdo con la dirección que registran en el expediente; de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Control



Disciplinario Interno de esta entidad, para lo de su competencia. Se remitirá en consecuencia copia del presente acto administrativo.

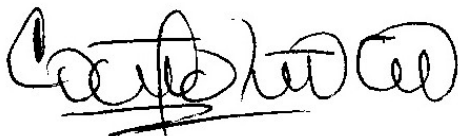
**ARTÍCULO CUARTO.** - Publicar la presente resolución en el Boletín Legal Ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO QUINTO.** - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, al correo electrónico [procesosjudiciales@procuraduria.gov.co](mailto:procesosjudiciales@procuraduria.gov.co).

**ARTÍCULO SEXTO.** - Cumplido lo anterior ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1701**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** - Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual se deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (05) días subsiguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR  
DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

SUAD DOLLY BAYONA PINEDA

CPS:

CONTRATO SDA-  
CPS20220961 DE 2022

FECHA EJECUCION:

22/02/2022

**Revisó:**

DANIELA URREA RUIZ

CPS:

CONTRATO SDA-CPS-  
20220734 DE 2022

FECHA EJECUCION:

22/02/2022

**Aprobó:**

**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

01/03/2022